



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

T-1941

TRÁMITE 1701/2019I

JUZGADO DECIMOSEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

5180/2020 ALCALDESA DE TLALPAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)
5181/2020 MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO A ESTE JUZGADO (MINISTERIO PÚBLICO)

En los autos del juicio de amparo 1701/2019, promovido por [REDACTED] contra actos del Alcaldesa de Tlalpan en la Ciudad de México, se dictó un acuerdo que a la letra dice:

"Ciudad de México; catorce de enero de dos mil veinte.

VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 1701/2019, promovido por [REDACTED] por su propio derecho, en contra de actos de la Alcaldesa de Tlalpan en la Ciudad de México, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1º y 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el trece de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido por razón de turno a este Juzgado de Distrito en la misma materia y jurisdicción al día hábil siguiente, [REDACTED], por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se transcribe:

"III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: Alcaldesa de Tlalpan en la Ciudad de México.

IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN DE CADA AUTORIDAD: Artículo 1 y 8 constitucional toda vez que la autoridad responsable ha omitido dar contestación a mi escrito de fecha 31 de octubre de dos mil diecinueve, violando en mi perjuicio mi derecho humano de petición consagrado en el artículo 8 Constitucional."

SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Por auto del quince de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 12 a 13), este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, sin tramitar el incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado y no ubicarse en los supuestos previstos para proveer oficiosamente; solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no presentó pedimento; así como señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional.

TERCERO Vista con cesación de efectos y ampliación. Mediante oficio registrado bajo el folio 28495 (fojas 18 a 26), la autoridad responsable Alcaldesa de la Alcaldía de Tlalpan, rindió su informe justificado y manifestó que ya había dado contestación a la petición formulada por la parte quejosa mediante escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve; por lo anterior, mediante proveído del doce de diciembre de ese año (foja 27), se dio vista con dicha contestación a la parte quejosa, a efecto de que manifestara respecto de la cesación de los efectos del amparo, o si era su deseo ampliar su demanda de amparo.

CUARTO. Mediante el acta de audiencia celebrada con anterioridad, se tuvo por precluido el derecho de la parte quejosa para ampliar la demanda respecto de la respuesta recaída a la petición de que se trata, en virtud que no realizó manifestación alguna en el plazo concedido para ello, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento y únicamente se tuvo como acto reclamado y autoridades responsables a los señalados en la demanda de amparo.

QUINTO. Sustanciado el trámite relativo al juicio, se celebró la audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la cual previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor de lo asentado en el acta que antecede; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con base en el punto primero del Acuerdo General 3/2013, referente a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto atribuido a autoridad administrativa con residencia en la Ciudad de México.

SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado en el presente juicio de amparo, siendo éste:

- La omisión de dar contestación al escrito de petición de la parte quejosa presentado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, ante la Ventanilla Única de la Unidad de Atención Ciudadana de la Alcaldía Tlalpan.

Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 40/2000, visible en la página 32, tomo XI, Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y sinopsis son los siguientes:

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los



66 FEB 2020 14:40hrs

Moisés

RECIBIDO
SECRETARÍA DE JUSTICIA

datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."

De igual forma, se cita la tesis aislada P. VI/2004, visible en la página 255 del tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone:

"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudir a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."

TERCERO. Certeza del acto reclamado. Una vez precisado el acto reclamado en este juicio de amparo, y atendiendo a que su existencia es un requisito esencial para efectuar el estudio de su constitucionalidad, es menester pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del mismo.

Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia número XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número de registro 212775, tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, página 68, de rubro: **"ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO"**.

Actos ciertos. La Alcaldesa de la Alcaldía de Tlalpan, al rendir su informe justificado (fojas 18 a 26), negó el acto omisivo que se le reclama y que ha quedado precisado.

No obstante lo anterior, aun cuando la autoridad responsable haya sustentado su negativa en el hecho de que la petición cuya omisión de contestar fue atendida mediante oficio AT/DGAJG/007700/2019 del seis de diciembre de dos mil diecinueve (foja 25), no debe perderse de vista que el acto reclamado debe considerar su existencia en relación con la presentación de la demanda de amparo.

En ese sentido, se tiene que si el oficio que contiene la respuesta de la petición formulada por la parte quejosa, fue notificado por este órgano jurisdiccional el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, mediante notificación por lista, mientras que la presentación de la demanda se efectuó el trece de noviembre del referido año, resulta evidente que a la fecha de promoción de demanda existía la omisión que se le atribuye a la responsable; de ahí que se tiene por cierto el acto reclamado.

Se sustenta la anterior determinación en la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 273, tomo I, Primera Parte-I, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dispone lo siguiente:

"ACTO RECLAMADO. EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda.

De igual forma, resulta aplicable al caso, la tesis visible en la página 391, del tomo XIV julio de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguientes:

"ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes niegan la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe."

Asimismo, por analogía, la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y uno, página trescientos cincuenta y uno, de rubro y sinopsis siguientes:

"PETICIÓN, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE UNA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA, RESULTA INDISPENSABLE ACREDITAR LA RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que se tuviera por presuntivamente cierto el depósito en el correo de un escrito dirigido a la autoridad responsable y a su vez, que aquél no ha sido proveído por ésta, no es suficiente para que proceda otorgar el amparo que haya sido solicitado por violación al derecho de petición, ya que para que pudiera configurarse una violación a dicho derecho es requisito sine qua non el que se acredite por parte del supuesto afectado, el hecho de que la petición formulada hubiese sido recibida efectivamente por la autoridad a quien se dirigió, ya que de otra manera resultaría jurídicamente imposible exigirle a ésta que diera respuesta a una solicitud que pudiera no obrar en su poder."

CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Previamente al estudio de la litis fijada en el asunto, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo vigente, procede examinar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o que de oficio advierta este Juzgado de Distrito, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, consultable en la página quinientos cincuenta y tres, tomo VI, Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete – mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto establecen:

"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."

Al respecto, este órgano de control constitucional advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, la cual establece lo siguiente:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

[...]

XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado."

De la lectura del supuesto normativo transcrito, es posible advertir que si los efectos del acto reclamado cesan, el juicio de amparo es improcedente.

Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo en la vía indirecta la falta de respuesta a una petición y la transgresión de esa omisión al artículo 8º constitucional, y durante el transcurso del juicio la autoridad responsable produce la respuesta, cesarán los efectos de la referida omisión y el quejoso podrá ampliar su demanda, promover un nuevo juicio de amparo o interponer el medio de impugnación correspondiente en contra de esa respuesta.

Por otro lado, conforme a la doctrina y a los criterios jurisprudenciales sustentados por nuestro Máximo Tribunal, se entiende que han cesado los actos y sus efectos cuando éstos son suspendidos o acabados, esto es, cuando se revocan o derogan los actos combatidos de manera que no producen efecto alguno en la esfera de derechos del gobernado, como si el acto jamás hubiera nacido.

Así, debe decirse que se actualiza la causa de improcedencia en comento, cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto que el gobernado considera que le causa perjuicio, o cuando constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental vulnerado, en atención a la imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo.

Sirve de apoyo al anterior razonamiento, la tesis jurisprudencial 2a./J. 205/2008 de la Segunda Sala del más alto Tribunal de la República, publicada en la página 605 del tomo XXIX, enero de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia Común, la cual establece:

"CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto".

Precisado lo anterior, cabe recordar que en el presente asunto, la parte quejosa reclama la omisión de dar contestación a la petición que elevó a través del escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, ante la Ventanilla Única de la Unidad de Atención Ciudadana de la Alcaldía Tlalpan.

Ahora bien, de las constancias exhibidas por la citada autoridad responsable junto con su informe justificado, se advierte la consistente en la copia certificada del oficio con número AT/DGAJG/007700/2019, del seis de diciembre de dos mil diecinueve (foja 25), la cual goza de eficacia probatoria plena en términos de los numerales 129 y 202¹ del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se observa que fue atendida la materia de la petición realizada a través del escrito del treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, respondiendo lo siguiente:

¹ **ARTICULO 129.** Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.

ARTICULO 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.



ASUNTO: RESPUESTA A PETICIÓN

Por lo expuesto, es dable concluir que se subsanaron las violaciones en que había incurrido la

autoridad responsable, por lo que este órgano jurisdiccional considera que efectivamente se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues los efectos del acto reclamado en esta vía se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal modo que las cosas han vuelto al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular.

Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, consultable en la página 38, del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala:

"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal."

Además, de conformidad con lo que establece la tesis 2a./J. 205/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro **"CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 80. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA"**, se desprende que si la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhibe la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto.

En esa tesitura, cabe destacar que en auto del doce de diciembre de dos mil diecinueve (foja 27), este órgano de control constitucional ordenó dar vista a la parte quejosa a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera y en su caso, ampliara la demanda; sin embargo, toda vez que transcurrió en su totalidad el plazo de ley concedido sin que lo haya realizado, pese a que fue notificada del mismo, tal como se desprende de las respectivas constancias de notificación (foja 31), se declaró precluido su derecho para hacerlo, lo que de suyo implicó que este órgano jurisdiccional estuviera imposibilitado para analizar la legalidad del oficio por el cual se dio respuesta la petición de que se trata.

En conclusión, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer el presente juicio con apoyo en numeral 63, fracción V, de la ley de la materia.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se

RESUELVE

ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por [REDACTED] por su propio derecho, en relación con el acto precisado en el considerando segundo, atento a los argumentos expuestos en el considerando último de este fallo.

NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

Así lo resolvió y firma Gabriel Regis López, Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, hasta el día de hoy treinta y uno de enero de dos mil veinte, en que las labores del juzgado permitieron concluir el engrose, quien actúa asistido de la Secretaria Mariana Fernanda de Lourdes Muñiz Pérez, quien autoriza y certifica que la presente sentencia se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy Fe. Jorge R.

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales conducentes.

Ciudad de México, a treinta y uno de enero de dos mil veinte.

El Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México

Mariana Fernanda de Lourdes Muñiz Perez



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

792

TRÁMITE 1701/2019I

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO DECIMOSEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

10704/2020 ALCALDESA DE TLALPAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)

En los autos del juicio de amparo 1701/2019, promovido por [REDACTED] contra actos del Alcaldesa de Tlalpan en la Ciudad de México, se dictó un acuerdo que a la letra dice:

"Ciudad de México, tres de marzo de dos mil veinte.

Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se desprende que no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio dentro del plazo a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia en la que en su único punto resolutive **sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria.**

Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, **archívese** el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido.

En la inteligencia que en su oportunidad, y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, **este expediente será susceptible de destrucción**, toda vez que se decretó el sobreseimiento del presente asunto, además de que atendiendo a la certificación secretarial de cuenta, se desprende que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, y este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual se deban conservar.

Por otra parte, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, y atento a la certificación secretaria que antecede, de la que se desprende que obra agregado un documento original exhibido por la parte quejosa, de conformidad con lo previsto en el punto décimo primero, último párrafo, del citado Acuerdo General, se pone a su disposición dicho documento por el plazo de **noventa días**, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin que se presente en el local de este Juzgado a efecto de que lo recoja, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho plazo, **será destruido**, al realizarse la depuración de las constancias que integran el juicio principal en que se actúa, con excepción de las detalladas en los párrafos que anteceden, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del mencionado Acuerdo General.

En ese sentido, se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas.

NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

Así lo proveyó y firma **Gabriel Regis López**, Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria **Mariana Fernanda de Lourdes Muñiz Pérez**, quien autoriza y certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. **Doy fe.."**

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales conducentes.

Ciudad de México, a tres de marzo de dos mil veinte.

El Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México

Mariana Fernanda de Lourdes Muñiz Pérez



ALCALDÍA DE TLALPAN
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
13:52hs
RECIBIDO
DIRECCIÓN JURÍDICA
MAR. 2020

